

LAS “NACIONALIZACIONES”
Contribución a la preparación del XXVI Congreso
de la OCI Unificada

Stéphane JUST
16 de septiembre de 1981

I. Las anteriores nacionalizaciones en Francia	2
El papel económico del estado	2
Las nacionalizaciones, la SFIO, la CGT, el PCF antes y en 1936.....	3
1936: nacionalización de las industrias de guerra	4
La SNCF.....	5
El Banco de Francia.....	6
Las nacionalizaciones y las creaciones de empresas en 1945-1947	8
Salvamento del capitalismo francés	9
El ejemplo de la electricidad	10
Nacionalización de la Banque de France y de los grandes bancos de depósitos.....	11
Las empresas nacionalizadas nutren a la empresa privada.....	12
Las indemnizaciones.....	13
Del estado burgués al aparato de dirigentes de las empresas nacionalizadas.....	14
II. Las nacionalizaciones actualmente proyectadas	15
Contradicciones y debilidades orgánicas del capitalismo francés.....	16
Situación de los grupos nacionalizados	17
Nacionalización de una parte del crédito.....	19
La política de los anteriores gobiernos	20
Mitterrand-Mauroy deben intentar superar la crisis	21
Los capitalistas, la burguesía, contra las nacionalizaciones	22
Nacionalización de los “holding” (casas madre) y de 26 bancos	24
Los capitalistas, la burguesía, acentúan sus ataques.....	26
Nuestra posición	27

I. Las anteriores nacionalizaciones en Francia

Sin hacer un eje de su campaña electoral de este tema, François Mitterrand ha levantado acta de la necesidad de nuevas nacionalizaciones durante su campaña electoral, nuevas nacionalizaciones para realizar un plan económico contra el paro, la inflación y la crisis. En 1972, en su introducción al *Programa de gobierno del Partido Socialista*, “*Cambiar la vida*”. Escribía: “*El Partido Socialista propone arrancar a los monopolios el instrumento de su poder transfiriendo los grandes medios de producción del sector privado al sector público. En lo inmediato, estas nacionalizaciones afectarán prioritariamente al conjunto del dominio bancario y financiero (¿qué jefe de empresa ignora que los bancos son los nuevos señores?), y se aplicarán en el dominio industrial según criterios precisos. Por ejemplo, se nacionalizarán las industrias para las que los pedidos del estado constituyen la mayoría de sus mercados y las industrias en las que la competencia no puede funcionar de forma satisfactoria en el plan nacional. Igualmente, cuando el desarrollo y la reconversión de determinadas industrias condicionan la expansión económica, o bien las empresas que dependan ampliamente de una financiación pública, se decidirán medidas de encuadramiento y, llegado el caso, apropiaciones públicas puntuales. A demanda de la mayoría de los trabajadores de una empresa, el parlamento podrá, por fin, decidir la nacionalización.*”

El *Programa Común de gobierno* que el PS, el PCF y el Movimiento de los Radicales de Izquierda firmaron el 12 de julio de 1972 estipulaba que los siguientes grupos serían nacionalizados: Dassault, Roussel-Uclaf, Rhône-Poulenc, ITT France, Thomson-Brand, CII-Honeywell Bull, Saint-Gobain, CGE. Preveía la nacionalización del crédito. Durante su discurso-programa pronunciado ante la nueva Asamblea Nacional, Pierre Mauroy añadió a ese programa de nacionalizaciones las de Usinor-Sacilor y Matra.

Por supuesto que, como lo escribe François Mitterrand: “*El objetivo de los socialistas es que cese la explotación del hombre por el hombre. Para ellos, el socialismo es una liberación. Saben que antes que ellos, en la historia, ha habido otras causas justas. Pero consideran que, en nuestra época, es vano querer liberar al hombre si no se rompen primero las estructuras económicas que han hecho del gran capital el dueño absoluto de nuestra sociedad.*”

Mitterrand añadía: “*Donde está la propiedad, está el poder*”. Los capitalistas, la burguesía, lo saben bien. Estallan en amenazas desde el mismo momento en que la palabra nacionalización se pronuncia, en que se trata de nacionalizar tal o tal otra empresa, tal o tal otro sector. Para ellos la palabra nacionalización evoca a la expropiación; en cualquier caso significa que su modo de producción, la “libre empresa”, ha quebrado.

El papel económico del estado

Sin embargo, esta palabra es elástica y toda nacionalización está lejos de ser mortal para los capitalistas. Las nacionalizaciones les son algunas veces no solo inmediatamente muy provechosas sino que, más aun, las que tuvieron lugar en Francia hasta ahora les han sido indispensables para la supervivencia del régimen capitalista.

Por otra parte, sin el papel económico que juega el estado, el capitalismo no habría podido vivir, desarrollarse y, más aun, sobrevivir. Incluso en la época dicha neoliberal del régimen capitalista, el estado y las “colectividades locales”, ayuntamientos y departamentos, han jugado un papel mayor en la constitución de la infraestructura (carreteras, ferrocarriles, canales, puertos, diques de carga, etc. En Francia fue el estado quien construyó los ferrocarriles y le cedió la gestión a sociedades

privadas. Fue el estado el que instituyó “Postes-télégramme-téléphone”, y muchas otras empresas. El estado jugó un papel no menos importante en la puesta en pie del crédito. El Banco de Francia fue fundado con el apoyo del estado en 1800, banco que cumplió una función central en el desarrollo del sistema de crédito (privilegio de emisión de moneda para toda Francia en 1848, descuento, avances sobre títulos, etc.). Fue el estado quien creó, en 1816, la Caja de Depósitos y Consignaciones, el Crédit Foncier en 1855, etc. Los mercados que abre el estado siempre han sido, evidentemente, una fuente constante de beneficios para el capital, y muy a menudo han sido decisivos para la constitución de importantes sectores industriales.

El papel económico del estado adquirió nuevas proporciones con el advenimiento del imperialismo, la época del capitalismo de los monopolios que sucedió a la del capitalismo liberal. Los gastos militares, y otros gastos parasitarios, han suministrado mercado al capital. Pero la función económica del estado, al servicio de la defensa del régimen capitalista, no se ha limitado a eso. “*Las diversas crisis que nuestra sociedad ha conocido, han acelerado cada vez, este proceso*”, escribe François Chevalier en su libro *Les entreprises publiques en France*. Prosigue:

“En primer lugar, la crisis consecutiva a la guerra de 1914. Numerosas variables se conjugaron para favorecer, después de esta guerra, el ascenso de las empresas públicas. Las necesidades de la reconstrucción de las regiones devastadas, las necesidad de volver a poner en pie el aparato de producción movilizado a causa de la sangría particularmente pesada de la guerra, obligaron al estado a intervenir directamente cuando la iniciativa privada estaba quebrada”. Y cita algunos ejemplos: “Así se explica la creación de sociedades de economía mixta en aplicación de la ley del 16 de octubre de 1919 sobre la energía hidráulica, o el estatuto de establecimientos públicos industriales y comerciales conferido a los puertos autónomos del Havre, de Bordeaux y de Estrasburgo, en virtud de la ley del 12 de junio de 1920, o también la creación de la Caisse Nationale Française des Pétroles por la ley del 25 de marzo de 1924... Creación de la Office National Industriel de l’Azote, devenida después Azotes et Produits Chimiques, filial al 100% de la Entreprise Minière et Chimique... Mines Domaniales de potase d’Alsace... la constitución de establecimientos públicos o de sociedades de economía mixta de empresa de transporte: la compañía de ferrocarriles de Alsacia y de Lorrena, la sociedad francesa de navegación danubiana... etc.”

Las “*sociedades de economía mixta*” son sociedades constituidas con capitales públicos y privados. Las participaciones que detenta el estado en esas sociedades pueden también asegurarle, muy bien la mayoría como dejársela a los grupos privados. Después se multiplicó este género de sociedades.

La crisis económica de 1929 exigió nuevas intervenciones importantes del estado en la economía. Desde principios de los años 1930 numerosas sociedades amenazadas de quiebra fueron reflatadas por el estado: sociedades de transporte aéreo, compañías marítimas. Air France fue constituida como sociedad de economía mixta, igual que la Compañía General Transatlántica.

Las nacionalizaciones, la SFIO, la CGT, el PCF antes y en 1936

Sin embargo, el problema de las nacionalizaciones había sido planteado, antes de la Primera Guerra Mundial, en los congresos radicales, pero sobretodo en los congresos de la SFIO. ¿Había que plantear la reivindicación de “nacionalizaciones”, especialmente las de los ferrocarriles y minas, para arrancar a los capitalistas la propiedad de los

principales medios de producción y de transporte? Igualmente, ¿había que exigir la “municipalización” de los servicios públicos? Jaurès se pronunció a favor. Guesde en contra.

Este problema fue planteado de nuevo en el interior de la SFIO, pero sobretodo por la CGT, tras la Primera Guerra Mundial. En su congreso de 1920, la CGT planteó la reivindicación de “nacionalización industrializada”. Jouhaux explicaba: *“Lo que queremos con la nacionalización es la vuelta a la nación de las propiedades colectiva, y la explotación, bajo el control de la nación, por la cooperación de los productores y consumidores.”*

La crisis de 1929 relanzó la cuestión de las nacionalizaciones. En 1932, el congreso de París de la SFIO formuló un “programa inmediato”, condición para la participación de los socialistas en un gobierno que dirigirían los radicales. Comprendía, entre otras cosas:

“Prohibición del comercio de armas de guerra. Nacionalización de las empresas que las fabrican. Fin de las concesiones a las compañías de ferrocarriles. Establecimiento de una red única nacionalizada. Creación de una Oficina de Transportes en común.”

Los radicales rechazaron ese programa inmediato.

En Bélgica, Henri de Man hizo adoptar al Partido Socialista Belga el proyecto de un plan de producción sin cuestionar, sin embargo, al régimen capitalista. En Francia sus adeptos en el interior de la SFIO retomaron esas posiciones y preconizaron, para realizar tal plan, la nacionalización del crédito.

Pero fue el Comité Confederal Nacional de la CGT de los días 20 y 21 de enero de 1934 el que dio un potente impulso a la idea de un plan y de la nacionalización del crédito y del “control efectivo de las industrias clave por los representantes de la colectividad y de los asalariados”. Cuando se estaba discutiendo el proyecto de programa del Frente Popular, en septiembre de 1935, la SFIO y la CGT propusieron incluir en él la nacionalización de los ferrocarriles, de los seguros, minas y sociedades de distribución eléctrica, el control del Comité des Forges y de las industrias clave, para determinar en la base los precios industriales, la organización nacional del crédito y el control de los bancos. El PCF y los radicales rechazaron esta propuesta. Explicaron que “no querían sembrar ilusiones”. Solo aceptaron la nacionalización de las industrias de guerra.

Sea como sea, la necesidad de recurrir a “nacionalizaciones” significa la quiebra del régimen basado en la propiedad privada de los medios de producción. Trae a colación la necesaria expropiación del capital. El término “nacionalización” toma una connotación revolucionaria, sobretodo, cuando se desarrolla un potente movimiento de masas. Aunque todas las “nacionalizaciones” están lejos de tener un carácter revolucionario, la burguesía rechaza esta palabra.

1936: nacionalización de las industrias de guerra

En 1936 se votaron en el parlamento dos “nacionalizaciones”: la de las industrias de guerra y la de las compañías de ferrocarriles. Una ley, de fecha 12 de agosto de 1936, decidió que *“antes del 31 de marzo de 1937, los decretos aprobados en consejo de ministros, sobre la propuesta del ministro de defensa nacional y de guerra, del ministro de la marina o del ministro del aire, podrán pronunciarse sobre la expropiación total o parcial de los establecimientos dedicados a la fabricación o comercialización de los materiales de guerra.”*

Esta ley le sirvió, ciertamente, a la burguesía francesa enfrentada a la inminencia de una nueva guerra y comprometida con el rearme. Le era indispensable unificar la producción de guerra, suprimir los obstáculos que levantaba la propiedad privada de los medios de producción a una producción coordinada y planificada. El simple hecho de tener que nacionalizar las empresas productoras de material militar, para poder elaborar y aplicar un plan de rearme, era una condena de la propiedad privada de los medios de producción en el mismo seno del modo de producción basado en la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, era más significativo que la nacionalización de las industrias de guerra fuese necesaria para que el imperialismo francés estuviera en condiciones de defender los intereses específicos del capital francés, contra los del imperialismo alemán. Pero el límite que implica el sistema capitalista estaba incluso en la misma ley. Estaban previstas fuertes indemnizaciones.

Sin embargo, importantes sectores indispensables a la producción de guerra no fueron nacionalizados. Solo en 1945 la Sociedad de Motores Gnôme-Rhône” fue nacionalizada. En la exposición de motivos de la nacionalización, la ordenanza del 29 de mayo de 1945, se estipulaba:

“Durante los cuatros años de ocupación enemiga, los dirigentes que se mantuvieron en sus puestos, habiendo perdido toda consciencia del deber nacional, centraron todos sus esfuerzos en la satisfacción de las necesidades del enemigo. Actuaron de forma que aceptaron que la SMGN (Gnôme-Rhône) deviniese en Francia el suministrador de confianza, y casi exclusivo, de los motores de la Luftwaffe.”

Los motivos de la ordenanza del 16 de enero, por la que se nacionalizaron las fábricas Renault, son del mismo género: *“Mientras que sus entregas al ejército francés se mostraron notoriamente insuficientes durante los años que precedieron a la guerra, sus prestaciones al ejército alemán han sido particularmente importantes.”*

La SNCF

La “nacionalización” de los ferrocarriles fue decidida por el decreto del 31 de agosto de 1937, dictado en aplicación de la ley del 30 de junio de 1937 autorizando al gobierno a aprobar tales decretos para asegurar el enderezamiento financiero y, especialmente, la reorganización de los ferrocarriles. En ese momento, el déficit de los ferrocarriles alcanzaba alrededor de treinta mil millones de francos de la época, cubierto por el estado y por empréstito. Este decreto decidió, pura y simplemente, la aplicación en enero de 1938 de un acuerdo tomado entre las antiguas compañías y el gobierno.

Se creó una “Sociedad Nacional de los Ferrocarriles”. *“Expirará el 31 de diciembre de 1982”*. En realidad se trata de una sociedad mixta, al menos hasta el 31 de diciembre de 1955. Las acciones fueron repartidas a razón de un 51% para el estado, en contrapartida a los miles de millones que le debían las antiguas compañías, y del activo que ya poseía en razón de las aportaciones anteriores a la construcción y mantenimiento de los ferrocarriles. Las acciones del estado estaban denominadas como acciones “B”. El 49% de las acciones restantes se atribuyeron a las antiguas compañías en razón de los activos que habían aportado. Eran denominadas acciones “A”. Hasta esa fecha, las antiguas compañías debían estar representadas por doce miembros de derecho sobre treinta y tres con que debía contar el consejo de administración de la SNCF. Las acciones A, atribuidas a las antiguas sociedades, representaban su supuesta aportación en capital. Rendían un 6% de interés y debían ser “amortizadas” por tramos anuales hasta 1982. Cada acción “amortizada” fue reemplazada por una acción de usufructo, denominada acción “J”, que continuaba rindiendo intereses hasta 1982. Un informe de

1937, sobre la nacionalización de los ferrocarriles, señalaba que, además, “*las antiguas compañías concesionarias poseían un dominio privado [sic] constituido con la ayuda de sus fondos propios, es decir beneficios que habían retirado de su explotación y de los que tenían libre disposición. Conservaron la propiedad de ese dominio privado, la SNCF se beneficiaba, sin embargo, de un derecho de recompra ante esos bienes de ese dominio privado que pudiera estimar necesaria para su explotación.*”

Por otra parte: “*Las compañías recibieron cada año de la SNCF las sumas necesarias para asegurar el interés y la amortización de sus propias acciones y el dividendo garantizado por el acuerdo de 1883... Esto equivalía a la anualidad de rescate que debía permitirle, en caso de desposesión, continuar haciendo frente a sus cargas financieras.*”

La ley preveía que, hasta el 31 de diciembre de 1955, las antiguas compañías detentaban directamente las acciones A y J, así como el capital de las acciones A ya reembolsado y los intereses vertidos anualmente por las acciones A y J que lograsen. En la fecha del 31 de diciembre de 1955, las acciones A y J debían ser distribuidas entre los accionistas de aquellas “*mediante prorrateo de sus respectivos derechos en el activo*” de cada una de las compañías. En esta fecha, la Asamblea General de Accionistas A y J debía elegir a seis representantes en el consejo de administración de la SNCF. Se produjeron, desde entonces, modificaciones atrasando, notablemente, el plazo del 31 de diciembre de 1955 a una fecha ulterior.

Les liaisons financières, edición de 1981, indica que el estado poseía todavía el 51% de las acciones de la SNCF y que una “Sociedad Francesa de gerencia de la participación”, filial de Nord Financier, poseía el 36,23%. Ahora bien, el grupo Nord Financier está en manos, a razón de un 5%, de la Européenne de banque del grupo Rotschild, y en un 94,29% de la banca Rotschild. Nord Financier, en tanto que grupo participa en un 17,21% en la antigua sociedad del PLM, de la que la familia Rotschild posee ya directamente el 22,35% de las acciones. A su vez, el grupo PLM controla o participa en 14 filiales y 47 subfiliales.

Parémonos aquí. Las mallas de la red, ¡se extienden... se extienden! Así, las antiguas compañías de ferrocarriles los han gestionado de forma que los han llevado a la quiebra financiera y a un callejón sin salida técnico. La “nacionalización” ha devenido un imperativo categórico para unificar las redes, modernizar y, por decirlo así, reconstruir el conjunto de una nueva red nacional. Nacida para remediar la quiebra total de las antiguas compañías, la SNCF ha sido, y es todavía, una gallina de los huevos de oro para aquellas y para los capitalistas en general

El Banco de Francia

En 1936, la intervención del estado en la economía también estuvo marcada por la ley del 25 de julio de 1936 que reformó la Banque de France. Fundada en 1800, ésta banca había devenido, sobretodo durante y después de la Primera Guerra Mundial, un instrumento determinante de la política económica y financiera del gobierno: el banco del estado, el banco central.

Pero seguía siendo un banco privado dirigido por un consejo de gerencia. A la cabeza del consejo de gerencia se encontraban el gobernador y dos vicegobernadores nombrados por el gobierno. Sin embargo era necesario que fueran propietarios respectivamente de 100 y de 50 acciones inalienables durante su mandato. Además, “*la mayoría de los gobernadores y vicegobernadores no tenían, en el momento de su nominación, el dinero necesario para adquirir el número indispensable de acciones, pero siempre encontraron, entre los regentes, banqueros que les adelantaran los fondos*

necesarios para ejercer la función”, escribe A. Dauphin Meunier en su libro La Banque de France. Los “regentes”, escribe, “eran hereditarios. Ciertamente, la ley del 24 de germinal año XI y el decreto del 16 de enero de 1808 habían decidido que regentes y censores serían nombrados por la asamblea general de los accionistas a través de mayoría absoluta de sufragios... Para prevenir la formación de una casta, los regentes debían ser renovados cada año en una quinta parte y los censores en un tercio... Pero los textos fueron cambiados. De hecho, regentes y censores se reclutaban por cooptación y entre las mismas familias: cinco sobre diez regentes banqueros eran descendientes de regentes-banqueros del imperio. Desde 1800, por ejemplo, la familia Mallet ocupaba sin interrupción la tercera parte de los puestos de regente... Asociados en 95 sociedades, los regentes ocupaban 150 puestos de administración.”

En múltiples ocasiones, no fue el gobierno quien utilizó la Banque de France para realizar su política económica y financiera sino que fue el consejo de regencia el que dictó al gobierno su voluntad. Fue este consejo quien impuso la caída de los gobiernos del cartel de izquierdas y quien impuso, en dos días, la dimisión del segundo gobierno Herriot y la formación del gobierno Poincaré en 1926. Fue él quien tiró abajo, en 24 horas, al gobierno Bouisson-Caillaux e impuso a Laval en 1933, el mismo Laval que, habiendo obtenido plenos poderes, gobernó mediante decretos-ley para practicar una política deflacionista y, particularmente, la reducción del 10% de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones de los antiguos combatientes. Le fue suficiente con dejar que se desencadenase la especulación contra el franco, o rechazar nuevos adelantos del Tesoro.

Vincent Auriol, ministro de finanzas del gobierno Blum, confió a una comisión paraministerial los trabajos para elaborar un proyecto. A. Dauphin-Meunier explica:

“La comisión sometió por unanimidad, en primer lugar al ministro, un proyecto que preveía la nacionalización de la Banque de France (mediante cambio de acciones contra títulos de la renta) de acuerdo con el plan de la CGT. Este proyecto fue descartado a petición de la Presidencia del Consejo que temía un voto contrario del gobierno. En efecto, en el Senado, M. Caillaux, favorable al mismo principio de la reforma, se declaraba hostil ante cualquier amenaza de estatalización y, por una curiosa coincidencia de circunstancias, su posición se veía reforzada por la del grupo comunista en la Cámara que, algunos días más tarde, el 16 de julio de 1936, declaraba públicamente (en palabras de M. Berlioz) que, para él, “no se trata de una medida de expropiación. No se trata de la creación de un banco de emisión según la concepción marxista”.”

La ley del 25 de julio de 1936 mantuvo, finalmente, el estatuto de banco privado para la Banque de France. Pero en lugar del Consejo de Regencia se constituyó un Consejo General. En lo sucesivo, el gobernador y vicegobernadores no tenían ya que justificar la propiedad de acciones del banco. Funcionario de la nación, el gobernador prestaba juramento ante el presidente de la República. El Consejo General tenía nueve consejeros considerados como representantes de los intereses colectivos de la nación, y más particularmente el sector bancario público; nueve consejeros representaban a los clientes y el personal de la Banque de France, por fin, la Asamblea General de accionistas, “reunida una vez al año en la última semana de enero bajo la presidencia del gobernador, en lugar de estar compuesta solo por los 200 mayor accionistas lo estaba por el conjunto de los accionistas. Cada miembro tendrá derecho a un voto, sea cuál sea su número de acciones.” La ley nombraba tres censores encargados de vigilar la administración de la banca y de los consejeros. Los consejeros eran elegidos o escogidos, no podían serlo más de tres años consecutivos, el remplazo del tercio de

ellos se hacía cada año. Los consejeros salientes no podían ser elegidos de nuevo antes de tres años después de haber dejado de serlo.

En 1936, fueron tomadas otras medidas como la institución de la Office National du Blé que permitía instituir los precios mínimos garantizados y organizar el mercado.

Las nacionalizaciones y las creaciones de empresas en 1945-1947

La más importante oleada de “nacionalizaciones” se produjo entre 1945 y 1947. En su libro ya citado, *Les entreprises publiques en France*, François Chevalier escribe:

“Tercera gran crisis del siglo XX, el segundo conflicto mundial también iba a provocar una considerable extensión del sector público,” Distingue: *“tres series de razones [que] se coordinaron... las participaciones que los alemanes y los colaboradores tenían en las sociedades francesas son transferidas al estado. Empresas francesas que habían sido culpables de colaboración con el enemigo fueron nacionalizadas.”* Cita la agencia Havas, Dassault, Gnome-Rhône devenida SNECMA, y prosigue: *“La liberación de los territorios se dobló por un inmenso impulso, en segundo, lugar, en el sentido de lo que se llamó la democracia económica: el movimiento de nacionalizaciones concebido, como procedimiento a la vez anticapitalista y antiestatista, se corresponde con esta exigencia en virtud de la cual vastos sectores de la economía fueron objeto de una apropiación colectiva: minas, electricidad, gas, sector del crédito (Banque de France y los cuatro grandes bancos de depósitos), seguros.”*

Sobre este aspecto de las cosas la interpretación de François Chevalier contiene una parte de verdad. Al mismo tiempo, es abusiva. No hay dudas que la forma de “nacionalización”, dada la intervención del estado en la economía, estuvo dictada por el movimiento de las masas hacia las aspiraciones revolucionarias y profundamente anticapitalistas. Pero esas nacionalizaciones fueron realizadas por un estado que era el estado burgués, por gobiernos que eran gobiernos burgueses, y su contenido social y económico era y, bajo estas condiciones, no podía ser más que burgués. La fórmula de “democracia económica” va de la mano con la “teoría” del estado por encima de las clases que hay que “democratizar”. Es un lastre para el proletariado y las masas populares. Se trata de ahogar sus aspiraciones anticapitalistas y “antiestatistas” (es decir sus aspiraciones a destruir el estado burgués para sustituirlo por el estado obrero). Tiene la “ventaja” de “justificar” la colaboración de las organizaciones obreras a la puesta en pie de la economía capitalista y, eventualmente, la “participación” de los sindicatos en la gestión de esas empresas, al lado pero bajo la dirección del estado burgués. El verdadero contenido de la “democracia económica” fue, durante esos años, claramente explicitado por las fórmulas de los dirigentes del PCF y del aparato de la CGT, entonces unificada pero controlada principalmente por el PCF:

“Es necesario un solo estado, un solo gobierno, una única policía”, y más aun *“La huelga es el arma de clase de los truts”, “es necesario producir, producir”, “producir primero, reivindicar después”.*

En el fondo: las nacionalizaciones de 1945-1947 fueron indispensables desde el punto de vista de la misma burguesía, por las razones que François Chevallier indica a continuación:

“Por fin, la inmensidad de las tareas de reconstrucción a cumplir imponía que el estado suplantase al sector privado en numerosas actividades y se dotase de los medios para dirigirlo, para racionalizar y planificar la economía nacional. Es con este fin que fueron creadas, posteriormente a las grandes leyes de nacionalización, las innumerables empresas públicas

encargadas de constituer el esqueleto de nuestra economía: Compagnie des messageries maritimes, Air France, Aéroport de Paris, RATP, Société de transports par pipeline (TRAPIL); Offices d'études et de recherches aéronautiques, a las que les siguió la Office national d'études et de recherches aéronautiques (ONERA) en 1963, Bureau de recherches de pétrole, Agence France-press (AFP), etc.”

Salvamento del capitalismo francés

Esta intervención sin precedentes del estado en la economía tuvo su causa más profunda en el callejón sin salida en el que el modo de producción capitalista se encontraba en Francia y, más generalmente, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Comprende la puesta en pie del Comisariado General del Plan creado en 1945. El plan Monnet le suministró sus cuadros y objetivos. No se le puede separar del conjunto de las relaciones económicas y políticas en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Los dirigentes de las organizaciones y partidos obreros contuvieron e hicieron retroceder, después, al movimiento revolucionario anticapitalista de las masas. Lograron imponerle la reconstrucción del estado burgués y las obligaciones de la reconstrucción de la economía capitalista. Participaron en los gobiernos de unión nacional que se sucedieron entre 1944 y 1947 en Francia. Era la traducción francesa de la colaboración contrarrevolucionaria y, para llevarla a cabo, del reparto de Europa entre el imperialismo y la burocracia del Kremlin realizado en Yalta y Postdam. Esta política incluía el conjunto de las nacionalizaciones y creaciones de empresas públicas realizadas entre 1945 y 1947, es inseparable también de la acción del imperialismo USA que organizó la reconstrucción del capitalismo en Europa y, ulteriormente, en Japón: acuerdo de Bretton-Woods, constitución del FMI, múltiples créditos, puesta en pie del plan Marshall, constitución de múltiples organismos económicos y financieros en Europa, Unión Europea de Pagos.

Esta política sólo logró, finalmente, salvar y volver a poner en pie al capitalismo francés por el impulso que la economía permanente de armamentos, cuyo epicentro es los USA, dio a la economía capitalista en su conjunto.

El objetivo de las nacionalizaciones y de la creación de empresas públicas en Francia entre 1945 y 1947 no presenta la menor duda: formalmente, contradictoriamente, salvar al régimen basado en la propiedad privada de los medios de producción, al régimen capitalista, relanzarlo. No fue nacionalizado, por supuesto, el conjunto de los grandes grupos y empresas capitalistas sino, con algunas pocas excepciones (Renault, Gnome-Rhône, Agence Havas), solamente los sectores que, bajo las condiciones de entonces, el estado podía y debía tomar a su cargo para reconstruir y relanzar la economía capitalista. La exposición de motivos de la ordenanza fechada el 13 de diciembre de 1944, por la que se nacionalizaban las minas del Norte y de Pas-de-Calais, porque fue la primera nacionalización realizada, es significativa:

“La potencia de renacimiento de un país después de una crisis grave puede medirse por la voluntad de que da prueba, colocándose en el punto de vista del interés general, por una parte, de adaptar los medios económicos de que dispone todavía a la situación en la que se encuentra, a fin de restaurar lo más rápidamente posible, simplificándolos y rejuveneciéndolos, los instrumentos de su prosperidad y, por otra parte, crear el clima social más favorable para la recuperación del trabajo. Solo el estado posee actualmente la suficiente autoridad para asegurar tal tarea cuyo cumplimiento es de suma importancia para el interés de todo el país; solo él puede, en efecto, siguiendo un plan de

conjunto, hacer participar, bajo las más favorables y rápidas condiciones, las explotaciones mineras en el renacimiento de la industria francesa. Solo él puede, a la vez, en el plano técnico, imponer a las minas un programa de producción, efectuar el reagrupamiento necesario a las explotaciones, normalizar el material, enfrentando, si es necesario, el concurso de los recursos financieros y, en el plano social, asegurar mejor la salvaguardia de los intereses y la sanidad de los trabajadores, apaciguar los conflictos que oponen, muy a menudo, a los patronos y obreros, hacer justicia con las justas reivindicaciones, hacer participar a los trabajadores en la gestión de las empresas, imprimir, por fin, el mismo impulso a los diversos personales de dirección y ejecución, colocados bajo su autoridad.”

El ejemplo de la electricidad

El “interés general”, no existe, menos aun existe la “economía” en general. Siempre está en juego el interés de tal o tal otra clase social y la economía de un tipo determinado: en este caso, se trata del interés de la burguesía en general y de la economía capitalista. La exposición de motivos de la ordenanza que instituía las “Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais” es válida para la intervención económica del estado durante los años 1945-1947, llevase a nacionalizaciones, a la creación de empresas públicas o se manifestase bajo cualquier otra forma. Así, en el libro ya citado, Michel Chevalier escribe:

“Más allá de un determinado estadio, el desarrollo económico supone una acrecida racionalización del aparato de producción que solo puede realizarse por la renovación de las estructuras económicas. Ahora bien, los mecanismos del mercado, incluso los controlados y orientados por la potencia pública, no siempre son capaces de asegurar la mejor racionalización deseable. En esta perspectiva, la apropiación política constituye un instrumento que permite facilitar el movimiento de racionalización del aparato de producción. La nacionalización de la producción, transporte y distribución de electricidad, suministra, desde este punto de vista, un buen ejemplo. Esas actividades estaban, en efecto, dispersas en tan gran número de empresas (1.150 sociedades para la distribución, 86 para el transporte de larga distancia, 54 para la explotación de 86 centrales térmicas, 100 para la explotación de alrededor de 300 centrales hidráulicas) que ninguna de ellas tenía capacidad para asegurar un desarrollo racional de esas actividades que pudiese satisfacer las necesidades de la clientela, y especialmente de la industria. Además, la importancia de los esfuerzos de reconstrucción y de las necesidades de energía, al acabar la guerra, exigían una unificación, tanto de las técnicas utilizadas como de los medios económicos y financieros.

La nacionalización y organización de la producción y la distribución de la electricidad bajo forma de monopolio ha permitido, gracias a la concentración de los medios materiales y humanos, racionalizar las condiciones del empleo de recursos y, por tanto, satisfacer las necesidades para una eficacia y productividad mayores.”

La nacionalización de los recursos y la producción de energía (carbón, gas y electricidad, ley del 8 de abril de 1946), la de determinados medios de transporte público (ampliando la nacionalización de los ferrocarriles realizada en 1937) la constitución entre 1945 y 1947 de empresas públicas, fueron medidas de salvación del

capitalismo francés, incluso si tales o tales otros intereses capitalistas particulares tuvieron que ser sacrificados más o menos.

Nacionalización de la Banque de France y de los grandes bancos de depósitos

Para cumplir plenamente esta función, el estado burgués ha tenido que dotarse de los medios de crédito indispensables. Es así como la ley del 2 de diciembre de 1945 nacionalizó la Banque de France y los cuatro grandes bancos de depósito (el Crédit Lyonnais, la Société Générale, el Comptoir National d'Escompte de Paris, la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie). La ley complementaria del 25 de abril de 1946, nacionalizó 34 compañías de seguros. Pero se afirmó, aquí también, el hecho que se trataba de la defensa y el relanzamiento del régimen capitalista. La Banque de France, como los otros bancos nacionalizados, fue puesta al servicio del capital privado. La Banque de France suministró, mediante los mil medios de la técnica financiera, créditos tanto a los bancos nacionalizados como a los privados, y a los establecimientos financieros de tipo diverso. Los bancos de depósitos nacionalizados suministraron una masa enorme de crédito e, incluso y en cierta medida, de capitales a las empresas privadas. Si, en el momento de su nacionalización, los cuatro bancos reunían el 55% de los depósitos de todos los bancos, una importante parte de los bancos denominados de depósitos no estaba nacionalizada pues estaba considerada como formada por pequeños y medianos bancos de depósito. El ejemplo del Crédit Commercial de France es bien conocido. En su libro *La Banque française*, Georges Petit-Dutaillis da las siguientes indicaciones que conciernen al Crédit Industriel et Commercial.

“He aquí las cifras correspondientes solo al CIC desde 1959, año de su centenario

	1959	1965	1977
Número de sucursales		63	108
Recursos de clientes (depósitos) en millones de francos	1.125	2.119	12.570

Cifras relativas al grupo anterior

	1959	1965	1977
Sucursales permanentes		63	1.117
Recursos clientela	4.066	8.061	55.000

El CIC disponía de cinco agencias en el extranjero y de lazos con numerosos bancos en el mundo entero.”

Fue creado un Consejo Nacional del Crédito, colocado bajo la presidencia de un ministro designado por el gobierno y que podía delegar sus poderes en el gobernador de la Banque de France. Igualmente, la ley instituía una comisión de control de los bancos de la que el gobierno dispone prácticamente. Los bancos denominados de “negocios”, no nacionalizados, están teóricamente controlados por un “comisario del gobierno”. Igualmente también, el estado nombra al director o gobernador de los bancos denominados de “negocios”. Todo ello no impide, de ninguna manera, vivir y prosperar a las múltiples formas de bancos privados y de establecimientos financieros. Están los bancos privados de depósito, los bancos de negocios, los bancos de crédito a largo y medio plazo, los bancos extranjeros en Francia, los establecimientos financieros, el crédito diferido, etc. También están las compañías de seguros no nacionalizadas en

1946, que se desarrollan y prosperan. También un tipo particular de organismo de crédito del que el autor de *La banque français* escribe:

“Al margen de los bancos inscritos y de los establecimientos financieros que acabamos de describir, no fueron tocadas por la legislación de 1944-1945 una tercera categoría de establecimientos. Son, de una parte, los servicios administrativos dependientes directamente del estado: fondos de desarrollo económico y social, cajas de ahorro, cajas nacionales de los mercados del estado, cuentas corrientes postales y cajas de ahorro postal y, por otra parte, los organismos de crédito privado, encargados por el estado de un servicio público o colocados bajo el control de servicios públicos: cajas de ahorro privado, Crédit Foncier de France, Comptoir des Entrepeneurs, Crédit National, Banque Française du Commerce Extérieur. Tienen un estatuto legal especial el Crédit Agricole Mutuel, el Crédit Populaire, el Crédit Coopératif et Maritime, las Caisses de Crédit Municipal; todos estos establecimientos están sometidos a la tutela de un ministro, generalmente el de finanzas (dirección del Tesoro).” Pero es sabido que este tipo de “tutela” nunca ha molestado a los capitalistas.

Las empresas nacionalizadas nutren a la empresa privada

Por otra parte, determinadas nacionalizaciones industriales realizadas en 1945-1947 dejaron abiertas amplias brechas que permitieron el desarrollo de empresas privadas fuertemente rentables, aunque con los subsidios y pedidos del estado, en la aeronáutica por ejemplo: lo que permitió a firmas como Dassault vivir, prosperar y desarrollarse.

Uno de los aspectos más chocantes de estas nacionalizaciones es que permitieron el desarrollo de relaciones extremadamente cerradas y amplias entre las sociedades nacionalizadas y las empresas públicas, fuentes de enormes beneficios para el capital privado, por los pedidos de las sociedades nacionalizadas y empresas públicas a las empresas privadas. Pero no solo eso. La utilización del capital público por las empresas privadas se generalizó hasta un punto increíble bajo la cobertura de la constitución de filiales y de subfiliales. Ya hemos visto este problema en lo que concierne a la SNCF. No es más que un ejemplo entre otros. Y veamos aquí otros:

La Corporación Nacional de Fábricas Renault tiene 85 filiales que, a su vez, tienen 186 subfiliales. La Sociedad Nacional Elf-Aquitaine tiene 85 filiales que, a su vez, tienen 426 subfiliales.

Aquí se captan los mecanismos de transferencia de valor del sector público al sector privado. Una parte de la plusvalía producida en las empresas nacionalizadas y públicas es transferida, bajo la forma de aportación en capital, al sector privado. Otras partes son transferidas bajo la forma de pedidos o de tarifas preferenciales. Por regla general, por otra parte, el estado toma a su cargo las industrias de elevada composición orgánica del capital. Ahora bien, se sabe que en este caso la tasa de plusvalía puede ser muy reducida pero cada parte del capital invertido, para serlo, debe rendir un beneficio igual a cualquier otra parte de la misma amplitud del capital invertido. Y ello sea cual sea la tasa de plusvalía que existe en la rama económica considerada. Se realiza una perecuación que permite a cada parte del capital rendir un beneficio medio (tasa de beneficio medio). Mediante los mecanismos del modo de producción capitalista, la plusvalía producida en los sectores de baja composición orgánica es transferida en parte a los sectores de composición orgánica elevada en los que la tasa de plusvalía es débil. Una mercancía se vende en el mercado a su precio de producción, es decir, por la suma del capital constante y capital variable que contiene, más esta misma suma multiplicada por la tasa de beneficio medio. El estado pueden vender las mercancías por debajo de su

precio de producción. Es decir, abandona una parte del beneficio, y por tanto de la plusvalía socialmente producida, que normalmente debería recibir. Bajo esas condiciones, contribuye a aumentar la tasa de beneficio de las empresas privadas que se reparten, en prorrata del capital que ha invertido cada una de ellas, la plusvalía social.

Las indemnizaciones

Puesto que se trataba de salvar al régimen capitalista, todo fue hecho para no “lesionar” ningún interés capitalista, en la medida de lo posible, siempre desde el punto de vista del capital. La regla aplicada generalmente fue que el estado se apropiase de las acciones. A cambio entregaba obligaciones a los antiguos accionistas. El valor nominal de cada una de ellas se correspondía con la cotización en bolsa en una época determinada. De otra manera, el precio de las obligaciones se determinaba sobre la estimación del activo. Las obligaciones rendían un interés anual y eran reembolsables por tramos, tramos que se escalonaban en un período que podía llegar a los 50 años. Los “rescates” y las “indemnizaciones” no fueron menos muy desiguales. Las pagadas a las sociedades de producción de transporte y de distribución de la electricidad y del gas fueron particularmente ventajosas. La ley estipulaba:

“Art. 10: para las sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa, la indemnización es igual al producto del número de acciones de cada accionista por su cotización media desde el 1 de septiembre de 1944 al 28 de febrero de 1945, o por la cotización el 4 de junio de 1945 cuando esta última cotización es superior a la cotización media en cuestión.

Para las sociedades cuyas acciones no se cotizan en bolsa, la indemnización debida a los accionistas está determinada sobre la base del valor liquidativo de la empresa dado por la comisión instituida a dicho efecto... Este valor liquidativo será determinado teniendo en cuenta todos los elementos y, especialmente, el valor de rescate previsto en el pliego de condiciones.

Art. 11: los tenedores de acciones por parte de sociedades por acciones con derecho a una parte del activo neto en caso de liquidación y las otras personas con derechos similares en una sociedad por acciones, recibirán una indemnización sobre la base fijada a continuación. Si se trata de una sociedad cotizada en bolsa, la indemnización global asignada a los accionistas será mejorada a favor de los tenedores iniciales en la relación de los derechos respectivos de los tenedores y de los accionistas en la liquidación.

Si se trata de otra sociedad, la indemnización asignada a los patronos es una fracción de la indemnización global calculada sobre la base del valor liquidativo en virtud del artículo 10 y su montante es proporcional al montante de los derechos de los tenedores en la liquidación. Cuando justifiquen que sus títulos fueron adquiridos posteriormente a la fundación de la sociedad, los tenedores de partes de la sociedad por acciones que no tienen derecho a un reparto en el activo neto en caso de liquidación recibirán una indemnización igual al valor que representaría el día de la transferencia la atribución durante diez años del dividendo medio atribuido a sus partes durante tres ejercicios anteriores al 1 de enero de 1946.

Art. 12: cuando la empresa no tiene el carácter de sociedad por acciones, la indemnización correspondiente a cada uno de los portadores de derecho está fijada en las condiciones previstas en el último apartado del artículo 10. Sea cual sea la forma de la empresa, es válido igualmente cuando la transferencia no se produce sobre el conjunto de los bienes de aquella. En este

caso, el montante de la indemnización está determinado teniendo en cuenta la importancia de la toma así como sobre el conjunto de las acciones de la empresa.

Art. 13: el pago de las indemnización se deberá efectuar por la entrega a los portadores de derechos, a cambio de sus títulos si es el caso, de obligaciones de la Caisse National d'Équipement de l'Électricité et du Gas previstos en el artículo 25 siguiente. Estas obligaciones son negociables y amortizables en cincuenta años o más por la vía del sorteo o del rescate. Rinden un interés del 3% anual. Reciben, además, un interés complementario variable con los ingresos y fijado en las condiciones del artículo 28."

El artículo 28 estipula:

"Su tipo no puede ser inferior al 1% de los ingresos para el servicio del complemento de interés previsto en el artículo 13 de la presente ley."

Para algunas antiguas compañías esto fue un verdadero maná. El ejemplo más significativo es el de la Compagnie Générale d'Électricité. Fundada en 1838, se desarrolló en la rama de la construcción eléctrica pesada. Devino un grupo que controla múltiples sociedades de producción, de transporte y distribución de electricidad y tiene participaciones en numerosas sociedades de este tipo. La nacionalización de la electricidad le fue particularmente favorable. Una nota del "diccionario de grupos industriales y financieros en Francia", edición de 1981, precisa: *"Los veinte años de 1950 a 1970 están jalonados de tomas de control en sociedades que han vivido, de cerca o de lejos, de la electricidad."* Señala: *"80% de su cifra de negocios realizada en Francia son pedidos del estado (telefonía, trabajos públicos, nuclear)".* Nos informa que *"hay que señalar la presencia en el consejo de administración de Richard Baumgartner, hermano de Wilfrid Baumgartner, antiguo ministro de finanzas, yerno de Eugène Mercier, el "rey" de la electricidad entre las dos guerras; de P. Huvelin y J. Mathurin, yernos de Giros, otro "grande" de la electricidad antes de la guerra"*.

Del estado burgués al aparato de dirigentes de las empresas nacionalizadas

¿Por quién podían ser realizadas estas nacionalizaciones? Evidentemente por un gobierno burgués. ¿Cómo? Prolongando, en cierta medida, el aparato del estado burgués. El aparato dirigente de las empresas nacionalizadas y públicas deviene parte constituyente del aparato del estado y gestiona esas empresas en relación directa con el capital privado. El ejemplo de los bancos nacionalizados es significativo desde este punto de vista.

Recordemos lo que *Informations Ouvrières* número 1017 escribía:

"Claude-Pierre Brossolette es PDG del Crédit Lyonnais desde 1973. Uno de los más próximos colaboradores de Giscard según L'Express. Ha sido, en efecto, director de gabinete cuando Giscard fue ministro de finanzas en 1962, después de haber hecho carrera en el ministerio de finanzas bajo Giscard, volvió a su gabinete de 1969 a 1971 como encargado de misión. De 1974 a 1976, Giscard le nombró secretario general de la presidencia de la república antes de confiarle el Crédit Lyonnais. Maurice Lauré es presidente de la Société Générale desde 1973. Al mismo tiempo es administrador de diferentes bancos, de CIT Alcatel, de Vallourec, de los Ciments Français, etc.

Jacques Calvet es director general de la BNP desde 1976. "El próximo colaborador de Giscard" según L'Express. En efecto, perteneció a su gabinete de 1956 a 1966, después, de nuevo en 1969 como director adjunto y como

director de 1970 a 1974, antes de entrar en la BNP, donde se convirtió en director general dos años más tarde.”

II. Las nacionalizaciones actualmente proyectadas

De entrada, el gobierno Mitterrand-Mauroy ha anunciado su intención de proceder a nuevas y amplias nacionalizaciones. En su declaración ante la Asamblea Nacional el 8 de julio, Pierre Mauroy ha precisado que estas nacionalizaciones afectarán a once grupos industriales y a la mayoría de los bancos con una masa importante de depósitos. Ello ha sido suficiente para que se desencadene una campaña política contra el gobierno Mitterrand-Mauroy, campaña de una violencia raramente igualada nunca, es el anatema.

Favila, editorialista del diario patronal *Les Echos*, escribió un artículo el 2 de septiembre titulado: “Nacionalizaciones, ¿con qué derecho?” Se puede leer: “*Puesto que el buen sentido no parece iniciar la acción de este gobierno y puesto que el Eliseo mismo se hace maximalista en materia de nacionalizaciones, cambiemos de registro [¿?]. El respeto a la propiedad privada, que está en la base de toda democracia, figura en efecto en primer lugar de las garantías que la Constitución francesa asegura a la nación. Ahora bien, las empresas nacionalizadas son todas ellas, por definición, bienes privados de los que los accionistas, personas físicas o jurídicas, y ellos solos, son los propietarios. Confiscarles, con o sin indemnización justa y previa, constituiría un atentado insoportable a los textos constitucionales que fueron adoptados por referéndum en 1958; más grave aun, tal medida crearía un precedente que autorizaría todos los excesos y abriría la vía a una dictadura oculta.*”

Si se considera qué fueron las nacionalizaciones de 1936-1937, la violencia del tono parece asombrosa. Volvamos otra vez al libro de François Chevalier *Les entreprises publiques en France*. Escribe: “*La profunda crisis que conocía especialmente la siderurgia, las ayudas del estado a que había recurrido, la colocaban delante de una situación de estricta dependencia frente al estado, en una situación que era análoga a la de las empresas de ferrocarriles de antes de guerra. Este ejemplo no es el único y lleva a pensar que, a corto plazo, la crisis actual podría llevar a una considerable extensión del sector público.*”

Ahora bien, este libro fue editado por *La Documentation française* el 9 de marzo de 1979. La “filosofía” de las nacionalizaciones a las que quiere proceder el gobierno Mitterrand-Mauroy ha sido claramente expuesta, notablemente en un libro que Alain Boubliil ha escrito *Le socialisme industriel* y que ha prologado Jacques Attali, libro fechado en 1977. Jacques Attali escribe:

“Muy esquemáticamente, la crisis que comenzó en 1967 se caracterizó por la ineficiencia de la orientación de los capitalistas hacia la inversión necesaria: los sectores de futuro (bienes de equipo, bienes colectivos, material antipolución, procesos de automatización) esenciales para la competitividad futura de la economía, es decir para el equilibrio de su desarrollo, no tienen todavía los medios para desgajar por sí mismos los recursos necesarios para su desarrollo, mientras que sectores como los productos de gran consumo y el inmobiliario continúan teniendo recursos considerables, sin haber logrado, sin embargo, reservas importantes en avances de productividad.

Esta situación conduce a la economía a utilizar la inflación, el endeudamiento y los despidos como modo de financiación de la inversión. Las nacionalizaciones del crédito y de los grupos esenciales del sector de los bienes de equipo son, así, evidentemente una condición esencial para esta

reorganización de la economía, de este afrancesamiento de sectores nuevos... Las nacionalizaciones (¿serán?) nacionalizaciones de la demanda que lograrán, por sus pedidos de bienes de equipo, reorientar en el mercado a las empresas privadas y públicas en esos sectores y contribuir a reequilibrar la estructura industrial del país, ahora muy débil, en las industrias del desarrollo que A. Boublit define “ramificaciones de soberanía”. Que el sector público se convierta en motor de un sector privado dinámico no tiene nada de nuevo. Porque en 1950 la potencia pública financiaba el 50% de las inversiones industriales (electricidad, cemento), mucho más de lo que supondrá tras las nacionalizaciones previstas por el Programa Común, se pudo levantar una industria francesa en los sectores situados más abajo (bienes de consumo, vivienda, etc.).

Una política industrial pasa por pedidos coherentes de un sector público. Mañana podrá suceder lo mismo en los sectores clave del progreso en este fin de siglo: la automatización, los bienes de equipo o los materiales antipolución. Estas ramas, y es el mérito de este libro demostrarlo con rigor, están todas ellas ligadas estratégicamente a las empresas del nuevo sector público. Su crecimiento depende, pues, de la calidad de la política del sector público. Las nacionalizaciones son, así, en esta doble perspectiva, un elemento esencial de la superación de esta tercera gran crisis del capitalismo y no, como dicen sus adversarios, una carga más, insostenible en períodos de crisis.”

El objetivo está señalado claramente: “superar la tercera gran crisis del capitalismo”, es decir, salvar otra vez más al capitalismo francés del desastre.

Contradicciones y debilidades orgánicas del capitalismo francés

Independientemente de su realismo, el razonamiento se apoya en un dato real: la agravación de las contradicciones y la debilidad del sistema capitalista han sacado a la luz las debilidades congénitas del capitalismo francés.

Al contrario que en la anteguerra, el capitalismo francés está profundamente integrado en la división internacional del trabajo, depende estrechamente del mercado europeo y mundial.

En *Profil économique de la France au seuil des années 1980*, publicado bajo la dirección de Jean-Pierre Pagé, publicación de carácter semioficial, se puede leer: “Solo a partir de 1958, primer año de existencia de la Comunidad Europea, se pudo asistir a un desarrollo espectacular de los intercambios con el exterior. De 1958 a 1973 la parte exportada de la producción nacional pasó del 8,9% al 14,7%, lo esencial de este progreso se ha podido observar entre 1969 y 1973.”

Las tablas integradas en el texto muestran que esta parte ha alcanzado el 17,3% en 1979. Las importaciones han pasado, inversamente, del 9,7% en 1958 al 15,3% en 1973, al 18,9% en 1979.

“Durante este período la exportación, actividad hasta ese momento marginal ciertamente, devenía el motor principal del crecimiento económico francés, las ventas al extranjero aumentaban en un 2,5% más rápidamente (en volumen) que el consumo de los hogares”.

Pero:

“Si la progresión fue espectacular, no lo fue menos la carencia para asegurar un equilibrio durable de la balance comercial.”

Las contradicciones que asedian al capitalismo francés se precisan cuando se analiza la estructura de las exportaciones e importaciones francesas.

“De 1973 a 1979 el déficit de los intercambios de productos industriales con los países de la OCDE ha crecido en 17.000 millones de francos, pasando de 13.700 a 30.200 millones de francos... El principal déficit (20.000 millones en 1979, o sea 9.000 millones más que en 1973) proviene de los intercambios de bienes de equipo profesional... Los intercambios de bienes de equipo profesional con la Comunidad se han saldado con un déficit de casi 11.000 millones en 1979 (de las $\frac{3}{4}$ solo en el apartado “máquinas y aparatos mecánicos”) al que ha contribuido con casi el 80% el saldo negativo con Alemania. Su dependencia de la misma naturaleza parece dirigir la evolución de nuestros intercambios de “máquinas y aparatos electrónicos profesionales” y de “material aeronáutico” con los países de la OCDE que no pertenecen a la CEE (esencialmente los Estados Unidos).

La situación no es más favorable en el dominio de los bienes intermedios, también deficitarios frente a los países industriales (10.000 millones en 1973, 17.000 millones en 1979), particularmente por el hecho de los resultados de los intercambios de productos siderúrgicos y de producto del trabajo de los metales con la CEE y la evolución muy desfavorable de los intercambios de “papel-cartón” con los otros países de la OCDE (2.500 millones en 1979, o sea una tasa de cobertura del 18%, prácticamente igual desde principios de los años 1970)... Todavía excedentarios en 4.7000 millones de francos en 1973, los intercambios de bienes de consumo (bienes de equipamiento de los hogares y bienes de consumo estricto sensu) se han saldado en 1979 con un déficit de 600 millones.”

De estos datos se deduce indubitablemente que, en lo que concierne a las industrias determinantes en el período actual desde el punto de vista económico, el capitalismo francés no es competitivo frente a los principales capitalismo. Cuando, irreversiblemente, el capitalismo francés está profundamente integrado en la división internacional, depende estrechamente del mercado europeo y mundial; cuando la crisis crónica del sistema capitalista se agrava y puede devenir brutalmente aguda y llevar a una catástrofe: el capitalismo francés no es capaz, por sus propios medios, de constituir en los dominios esenciales (equipamientos industriales, máquinas y aparatos electrónicos, componentes electrónicos, bienes intermedios, es decir siderurgia y química), las industrias necesarias que sean competitivas.

Situación de los grupos nacionalizados

Se constata la dependencia financiera, económica y técnica en determinados sectores en relación con los grupos extranjeros.

- El grupo Roussel-Uclaf es el más importante grupo farmacéutico francés. Pero no tiene talla para rivalizar con los grandes grupos mundiales en materia de investigación y exportación. Hoëchst, el gigante alemán, posee del 57,95% del capital de Roussel-Uclaf.
- El grupo CII Honeywell Bull es el “campeón francés” de la informática. Pero Honeywell Bull, grupo estadounidense, posee el 47% de las participaciones del grupo CCI-HB que, además, está bajo su dependencia tecnológica.
- El grupo ITT France y su filial, la Compagnie Générale des Constructions Téléphoniques, están bajo el control del grupo estadounidense ITT.

- El grupo Thomson-Brandt (escribe en *Monde de l'Économie* Jean-Michel Quatrepoint), “desde principios de los ochenta ha comenzado un viraje que se parece mucho a una retirada. Se ha conocido, entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales, la firma de un acuerdo entre el japonés Victor Japan (filial de Matsushita), la firma británica Thorn-EMI, la alemana AEG Telefunken y Thomson-Brandt; un reparto de tareas entre los tres grupos europeos se efectuaría bajo el báculo de JVC. El objetivo sería constituir, a partes iguales (25% para cada sociedad), un grupo industrial que se encargaría de gestionar la construcción de tres fábricas a crear: la primera en Gran Bretaña para los videodiscos, la segunda en Francia para las cámaras, la última en Berlín Oeste para los magnetoscopios.”

Igualmente se constata que el número de grupos y empresas de esos sectores han sufrido pesadas pérdidas los últimos años.

- Rhône-Poulenc ha perdido 2.000 millones de francos en 1980.
- La CGCT ha perdido 166 millones de francos en 1978-1979 y 145 millones en 1980.

Alain Baoblil escribe en su libro: *Le secteur public industriel*: “Thomson-CSF es el principal productor francés de componentes electrónicos. El fracaso del Plan-Componentes, la ausencia de integración entre productores y usuarios, la débil talla de las empresas del sector, frente a los gigantes estadounidenses, hacen del departamento de componentes de Thomson-CSF (SESCOSEM) una empresa deficitaria y que no tiene ya los medios para financiar el esfuerzo de investigación indispensable para sobrevivir.”

- En 1981, el grupo Pechiney Ugine Kuhlman se deshizo de sus intereses en las acerías especiales (Ugine Aciers) cediendo sus intereses a Sacilor al precio de 1 franco. Este apartado se había convertido en el cáncer del PUK (2.500 mil millones de pérdidas en cinco años).

- Sacilor tiene una cifra de negocios de 16.800 millones de francos en 1980. Pero su endeudamiento alcanza 14.400 millones. Sus pérdidas se han elevado también en 1980 a 1.980 millones de francos. El estado ya había salvado Sacilor en 1978, tomando a su cargo la mayor parte de su endeudamiento, al tomar el control del 76,9% de las participaciones.

- Usinor tiene una cifra de negocios de 22.000 millones de francos en 1980. Pero su endeudamiento se eleva a 19.000 millones. Ha sufrido una pérdida de 1.250 millones de francos en 1980, 3.000 desde 1978 fecha en la que Usinor también había sido reflotada por el estado, tomando éste a su cargo lo esencial de las antiguas deudas y convirtiéndose en mayoritario en el grupo con el 67% del capital.

Se constata también la disparidad de los grandes grupos de estos sectores:

- El grupo Pechiney Ugine Kuhlman es un grupo de dimensión internacional (cuarto grupo internacional en el aluminio). Pero sus actividades están dispersas entre el aluminio (“esta actividad confiere verdaderamente el carácter multinacional al grupo pues constituye un ejemplo perfecto de integración vertical internacional”) que es la espina dorsal del grupo, la química, los metales no ferrosos, la rama nuclear.

- El grupo CGE es la tercera empresa francesa. Constituye un conglomerado estructurado alrededor de dos pivotes. El primero está diversificado: energía, empresas eléctricas, construcción, trabajos públicos, electrónica, electromecánica, acumuladores y baterías.

En el número especial de *Monde économique* del 15 de septiembre de 1981, reservado a las nacionalizaciones industriales, se puede leer:

“El grupo siempre se ha encontrado a gusto allí donde la competencia era limitada, allí donde el estado era el principal cliente. Así, se han creado lazos estrechos entre la CGE y EDF, la CGE y los PTT, la CGE y el equipamiento.”

El segundo pivote agrupa actividades financieras.

- La CGE controla especialmente la más opulenta de las empresas de servicios. La Compagnie Générale des Eaux (14.000 millones de cifra de negocios).

- La Compagnie de Saint-Gobain Pont-à-Mousson tiene una actividad extremadamente diversificada: vidrio templado y materiales de construcción, aislamiento, embalaje, canalizaciones, etc. En 1980, Saint-Gobain ha hecho su entrada en la informática con su toma de participaciones en CII-HB y Olivetti. *“Saint-Gobain Pont-à-Mousson realiza cerca del 40% de sus ventas consolidadas en el extranjero pero emplea el 50% de su personal fuera de Francia.”*

Por fin, Alain Boubilil, en su libro ya citado anteriormente, señala de una forma general *“el nivel de inversiones industriales del sector privado se ha mantenido por debajo de 10 puntos en 1977 respecto a lo que suponía en 1973.”* Es decir: la situación no puede más que agravarse. Desde hace años, la mayor parte de las inversiones las realiza el estado. Recordemos, por otra parte, que la mayoría de los grandes grupos viven parcialmente, y a veces casi totalmente, a costa de los pedidos del estado.

Si se coge el ejemplo de la electrónica, es evidente que, incluso desde el punto de vista capitalista, una reestructuración de la CGE, de Thomson-Brand, de Saint-Gobain, de ITT-Francia, de CII-HAB, de Dassault y de Matra, permitiría al estado controlar *“el 30% del mercado francés de los circuitos integrales, 100% de la construcción telefónica pública y el 68% de la transmisión, 40% del mercado de la informática tradicional, el 40% de los materiales electrónicos profesionales (y el 100% de los militares), el 35% de la electrónica para el gran público (TV, radios, etc.), el 50% de la electrónica médica.”* *Le Monde économique* del 21 de julio de 1981, que da esta apreciación, añade: *“Las nacionalizaciones permitirán al estado disponer de los medios necesarios para llevar adelante las reestructuraciones, piedra clave de una estrategia industrial a largo plazo” dicen los socialistas.”*

La decisión de realizar la nacionalización de once grupos industriales, que Pierre Mauroy anunció en su declaración ante la Asamblea Nacional, se corresponde con:

- La nacionalización de pérdidas, en lo que concierne a grupos como Sacilor, Usinor, Rhône-Poulenc, y determinadas empresas de otros grupos.

- La necesidad de reagrupar toda una serie de empresas para intentar constituir grupos más racionales y eficaces.

- La tentativa de constituir industrias punta francesas capaces de ser competitivas a escala internacional y, en consecuencia, la necesidad de dotarlas, de cara al futuro, de una base y osamenta más sólidas (una operación similar a la que se realizó en 1945-1947 en los transportes y la energía)

- La tentativa de dar un potente impulso a la economía y superar la crisis tal y cómo la sufre el capitalismo francés.

Nacionalización de una parte del crédito

Para realizar esos objetivos, la nacionalización de esos once grupos, que se añadirían a las nacionalizaciones y empresas públicas, no es suficiente. El estado debe

aumentar considerablemente su imperio sobre la palanca indispensable que constituye el crédito: de aquí el objetivo de la nacionalización de todos los grandes bancos de depósitos (todos aquellos en los que los depósitos superan el millardo de francos), ampliando las nacionalizaciones realizadas en este dominio en 1945. Tanto que, como lo remarca Alain Boubli:

“El aparato productivo francés entre 1954 y 1972 conoció alrededor del año 1964 un quiebro de tendencia que afectó a la rentabilidad del capital invertido. Este cambio golpeó desigualmente a los diferentes sectores de la actividad económica. El proceso de substitución del capital llegó a invertirse en los sectores menos productivos, como BTP (construcción y trabajos públicos), los servicios y el comercio... El capital, paradójicamente si solo se tienen en cuenta los mecanismos de la economía de mercado, se concentró en los sectores de más baja productividad aparente.

Igualmente, el endeudamiento de las firmas creció en detrimento del aumento de los fondos propios en sus recursos de financiación de las inversiones.

Es posible, en el seno de la industria, entre los sectores, constatar un ritmo de acumulación diferente. Quien efectúa la regulación intersectorial es el aparato bancario.

Una medida fundamental de política financiera pasó inadvertida en 1965, la supresión de la separación de los bancos de negocios y los de depósito fue un instrumento institucional de esta evolución, querido por los poderes públicos.

Los bancos de negocios pudieron aumentar sus recursos recogiendo los depósitos a fin de aumentar su penetración en el sector industrial. La técnica es simple, adquisición de una parte del capital débil (20%) pero dominante en razón de la dispersión del accionariado a fin de controlar la gestión y, sobretudo, devenir el principal suministrador de crédito de toda naturaleza del grupo [...] La remuneración del banquero, y aquí se encuentra el punto esencial de la mutación del capitalismo francés, devino superior a la del accionista, en cantidad (tasa de interés elevada) y en calidad (estabilidad en el tiempo) [...]

La parte de los gastos financieros soportada por las empresas que habían entregado informe al Crédit National entre 1965 y 1974 pasó del 5,4% al 10,9% de forma regular. Este aumento se hizo en detrimento del ingreso bruto de explotación y de los salarios.”

Señala, además, que los bancos dirigen las inversiones hacia lo que es inmediatamente rentable para ellos, especialmente en la inmobiliaria. Por fin, el autor propone la constitución de un banco nacional de inversiones (BNI).

La política de los anteriores gobiernos

Los diferentes gobiernos de la V República, sobretudo desde el año 1974 en que coinciden la llegada al poder de Giscard D'Estaing y la de una crisis que no ha podido ser superada, han respondido de cierta forma a la situación del capitalismo francés. Así, se puede leer en el *Profil économique de la France*, ya citado: “A la exigencia del desarrollo industrial que marcó el periodo precedente, le sucede ahora la del redespiegue industrial, que debería conducir a transformar, tanto como en el pasado (y probablemente más, el paisaje de nuestra industria en el curso de los próximos años. Tal redespiegue se anuncia mucho más difícil teniendo en cuenta que los comportamientos económicos de nuestros ciudadanos dejan todavía demasiado poco

espacio a las cualidades de innovación, adaptación y movimiento. Se trata de devolver el gusto de la iniciativa y responsabilidades a esos industriales que, durante demasiado tiempo, han vivido bajo diversas protecciones (las de fronteras primero, después de las devaluaciones, asistencias (subvenciones) y controles: la liberalización de los precios a partir de 1978 marcha, pues, en ese sentido.”

Con otras palabras, se trata de liquidar lo que el capital considera como no rentable, de dejar operar a las leyes del mercado... hasta cierto punto. El estado sigue siendo el gran dispensador de créditos, pedidos, subvenciones: *“Se trata, sin embargo, de consolidar y crear industrias competitivas a escala mundial y de salvaguardar las actividades indispensables para el mantenimiento de la autonomía de decisión y puesta en marcha de un modo de desarrollo original de Francia. Incluso si esas actividades no son en principio competitivas. En este sentido hay que interpretar los esfuerzos públicos para sanear la siderurgia o promover una industria informática nacional.”*

Se trata de miles de millones y millares de millones entregados, bajo una u otra forma, a los grandes grupos capitalistas, mientras que el paro se extiende inexorablemente (liquidaciones parciales o totales de empresas: la siderurgia suministra un buen ejemplo de esta política). De cualquier forma, no se plantea tocar la sacrosanta propiedad privada de los medios de producción. Un poco más abajo, se puede leer:

“Frente a las empresas privadas, los principales medios de incitación clásicos que permiten la traducción concreta de esas políticas son de tres ordenes: las subvenciones, los préstamos con condiciones preferentes y las ventajas fiscales. El ordenamiento del territorio, las reestructuraciones de las empresas, incluso de sectores industriales, la formación profesional, el desarrollo de las exportaciones, han sido notablemente favorecidas por esos incentivos [...]

Frente a las empresas públicas, la evolución de las relaciones con el estado tutor procede con el mismo espíritu y revela a la vez una política de reordenación de las responsabilidades y un deseo de liberación del compromiso (escalonado durante numerosos años) respecto a las finanzas públicas. Así es como se produjeron los “contratos de empresa” con las grandes empresas nacionales, confiriendo, por una parte, mayor libertad de acción (particularmente en el dominio tarifario) a sus dirigentes y, en contrapartida y por otra parte, permitiendo la reducción e, incluso, la desaparición de las ayudas del estado que no se corresponden con indemnización por un servicio específico.”

Mitterrand-Mauroy deben intentar superar la crisis

Una vez habiendo accedido al poder, el Partido Socialista no puede retomar a cuenta suya esta política sin liquidarse en breve plazo. Para comprenderlo bien es necesario recordar bajo qué relaciones con los gobiernos de la V República se ha reconstruido el Partido Socialista y, finalmente, ha llegado al poder. Entronizando a De Gaulle, a la V República, participando en sus primeros gobiernos, Guy Mollet y el aparato de la SFIO casi destruyeron enteramente a la vieja SFIO. Sólo presentándose como irreductiblemente opuesto a los gobiernos de la V República, como portador de las aspiraciones populares, pudo construirse el PS y conquistar una influencia electoral sin precedentes.

El vasto programa de nacionalizaciones afirmado desde 1972 en el programa del PS *Cambiar la vida*, responde a la aspiración popular de acabar conjuntamente con la V República, sus gobiernos y el gran capital. Las masas ligan estrechamente la V

República, sus gobiernos y el gran capital. La inflación y el paro, que se han desarrollado particularmente con y después de la crisis económica de 1974, han reforzado en el espíritu de las masas esta relación, sus sentimientos y sus aspiraciones anticapitalistas. Echar abajo a Giscard, acabar con el alza de los precios, con la agravación del paro, la crisis, interrumpir la marcha hacia la catástrofe, forman un todo en el espíritu de las masas. Echando abajo a Giscard, las masas han querido derribar al representante de la burguesía, al gobierno de la burguesía. Una vez echado abajo Giscard para resolver la crisis, es necesario enfrentarse al capitalismo, a los magnates de las finanzas y de la industria.

En cualquier caso, el gobierno Mitterrand-Mauroy está ante la necesidad de intentar realizar una política económica que no sea, como la de Giscard-Barre, una política de adaptación a la crisis sino una política que se esfuerce en superar la crisis, en resolver las contradicciones y debilidades orgánicas del capitalismo francés, que renueva, bajo otras condiciones y sobre otras bases, la operación realizada en 1945-1947. En cualquier caso, tal operación está destinada al fracaso pues el conjunto de las relaciones económicas y políticas del sistema capitalista son profundamente diferentes de las que existían en 1945-1947: el imperialismo USA está en crisis, lejos de jugar el papel de reconstrucción del régimen capitalista, que jugaba entonces, está obligado a lanzar sus propias contradicciones sobre las otras potencias imperialistas; la competencia de las grandes potencias capitalistas, que el imperialismo USA ayudó a reconstruir, deviene cada vez más aguda; también esas potencias están en crisis como todo el sistema, la clase obrera francesa no puede ser disciplinada en nombre de “producir primero”; la perspectiva es la dislocación de la división internacional del trabajo, del mercado mundial; el capitalismo francés depende ahora muy estrechamente de éste. Sin embargo, el gobierno Mitterrand-Mauroy debe intentarlo. Se esfuerza, a cuenta de la salvaguarda de los intereses y del futuro del capitalismo francés, en poner en pie una nueva política económica. Sin embargo, en nombre de los intereses generales de la burguesía, está obligado a dañar numerosos intereses específicos. Más, para responder a las aspiraciones de las masas tiene que darle un aspecto anticapitalista a las medidas que toma. Así es como Bérégovoy, anunciando el plan gubernamental de nacionalizaciones de los bancos, ha llegado a declarar: se trata de “*liberar a la economía francesa de las potencias financieras que la ahogan*”, devolviéndole “*todo su dinamismo*”. Actuar sobre este plano, de esta forma, le es mucho más necesario al gobierno Mitterrand-Mauroy teniendo en cuenta que necesita cubrir su carencia política en cuanto al cuestionamiento del aparato del estado, el estado RPR-UDF, resultante evidente de su voluntad de defender a la V República y sus instituciones, al estado burgués.

Los capitalistas, la burguesía, contra las nacionalizaciones

Los capitalistas, la burguesía, no pueden aceptar. En primer lugar por una primera y determinante razón. La nacionalización de los once grupos y de una gran parte del crédito tiene una significación política. Es la consecuencia de la derrota histórica que ha sufrido en el combate clase contra clase, aunque se haya concretado en el plano electoral durante las elecciones presidenciales y legislativas que le han seguido. Es una imperiosa necesidad para ella: la burguesía debe cogerse la revancha contra las masas. Las nacionalizaciones son una nueva encrucijada política en relación con las masas.

Los textos preparatorios para el congreso de la OCI-unificada caracterizan de forma precisa al gobierno Mitterrand-Mauroy: “*gobierno de colaboración de clases de*

tipo frente popular. Estando caracterizado así el carácter de clase de este gobierno, los revolucionarios no podrían considerar, en consecuencia, a este gobierno como un gobierno obrero y campesino. No es nuestro gobierno. El gobierno Mitterrand-Mauroy, gobierno de colaboración de clases de tipo frente popular es, sin embargo, un gobierno burgués que la burguesía no puede reconocer como el suyo.”

Al no disponer, en la actual etapa, de los medios políticos para llevar al poder a un gobierno que la burguesía reconozca como “su gobierno”, ésta presiona al gobierno Mitterrand-Mauroy por todos los medios políticos y económicos de que dispone (no solo para que contenga a las masas sino para que las haga retroceder, entable el combate contra ellas y aplique la política que le dicta); de ese modo puede descargar golpes sobre las masas y preparar las condiciones de la revancha contra ellas, contra la clase obrera en particular. Ya ha obtenido que el gobierno Mitterrand-Mauroy abandone en el asunto del SAC, es decir dejando intacto al estado RPR-UDF. En lo que atañe a las nacionalizaciones, también le es necesario hacer retroceder lo más lejos posible al gobierno, hacer que entre en contradicción abierta con las aspiraciones de las masas. En sí mismo esto sería una razón suficiente para que la burguesía combatiese con todos sus medios el plan de nacionalizaciones del gobierno Mitterrand-Mauroy.

Hay otras. *Le Monde de l'Économie* del 15 de septiembre escribe:

“Es la primera vez que una nación occidental retoma al sector privado una parte tan importante de sus medios de producción: 15% de los efectivos y casi el 30% de la cifra de negocios de la industria según unos, mucho menos según otros [...]

Encontrándose en el campo de las nacionalizaciones casi la totalidad de la siderurgia, toda la producción de aluminio, la mitad de la del vidrio, toda la química fina, una gran parte de la construcción eléctrica, pesada y ligera, toda la rama de la informática, un sector no despreciable de la construcción y de los trabajos públicos, un buen sector farmacéutico, sin contar la metalurgia fina. Todo ello añadiéndose al sector público industrial ya existente, que comprende la mitad del automóvil con Renault, una parte apreciable del sector petrolero con Elf-Aquitaine y Total, etc. No olvidemos, por fin, la nacionalización de la casi totalidad del crédito (39 bancos solamente sobre 340) pero más de 110 con sus filiales y, sobretudo, 95% de los depósitos.”

Naturalmente, es inevitable que sean pisoteados múltiples intereses capitalistas particulares. Sin embargo, lo más importante es que, de cualquier forma, las nacionalizaciones siempre son la demostración de la quiebra del modo de producción basado en la propiedad privada de los medios de producción, cuyo motor es la ley del beneficio. Cuando alcanzan esta amplitud y, sobretudo, esta calidad, tanto desde el punto de vista de los sectores industriales nacionalizados como desde el punto de vista del crédito, significan que la única solución a la crisis, a las contradicciones económicas, así como a la debilidad orgánica de la economía francesa, es la expropiación del capital, la ruptura con la ley del beneficio, la planificación de la economía en función de las necesidades sociales: en pocas palabras, avanzar hacia el socialismo. Es la negación del capitalismo y es, evidentemente, intolerable para los capitalistas, para la burguesía. El capital, por el contrario, puede muy bien aceptar que el estado tome participaciones más o menos importantes en los “holding” que controlan numerosas empresas industriales, grandes o pequeñas. Incluso dentro del gobierno hay portavoces directos que han preconizado esta “solución”.

Nacionalización de los “holding” (casas madre) y de 26 bancos

El gobierno Mitterrand-Mauroy no puede aceptar esta “solución”. Parecería capitular abiertamente en campo raso, con armas y bagajes, ante los capitalistas, ante la burguesía.

Sin embargo, según las primeras informaciones oficiales sobre los proyectos concretos de nacionalizaciones, éstas serían mucho menos radicales de lo que quieren hacer parecer *Le Monde Économique*. El gobierno se esfuerza para hacerlas “aceptables” al capital. ¿Cómo podría ser de otra manera? El gobierno está en conflicto con la burguesía pero es un gobierno burgués. Acaba de lanzar un empréstito a tipos extraordinarios del 16%. Garantiza a los patronos el derecho al despido. Multiplica las concesiones a los jefes de empresa y les llama a ¡luchar contra el paro!

La forma que tomarán las nacionalizaciones será la de nacionalizaciones de los “holding” financieros que, generalmente, constituyen los grupos concernidos. La mayoría de esos grupos sujetos a nacionalización están formados así: una sociedad financiera constituida por accionariado (el holding), la cual, en tanto que entidad, posee participaciones en el capital de otras empresas (las subfiliales) (y esto puede aun extenderse más). Muy a menudo, los accionariados de los holding están cruzados, así como las participaciones en las filiales y subfiliales. La nacionalización de un grupo significa esto: el estado se apropia la totalidad del accionariado del “holding” en cuestión y, en consecuencia, de las participaciones de ese “holding” en las filiales y una parte de las participaciones de éstas en las subfiliales. Así, cuando el “holding” en cuestión posee el 100% de las participaciones de una filial, el estado toma el control absoluto de esta filial; cuando el “holding” posee más del 50% de las participaciones de una filial, el estado deviene mayoritario en esta filial; cuando el “holding” posee menos del 50% de las participaciones de una filial, el estado posee una participación minoritaria en ella.

Determinados “holding” nacieron de una casa. Es, por ejemplo, el caso de Pechiney-Ugine-Kuhlmann (PUK). En este caso, en general, el holding posee todas las participaciones de esta o esas casas. Así, el holding financiero PUK posee el 99,99% de las acciones de Pechiney-Aluminium que constituye el mismo, por otra parte, un subholding que posee participaciones en una infinidad de filiales, siendo estas empresas industriales. El holding PUK posee igualmente el 99% de las acciones de Ugine-aciers. En 1966, Ugine y Kuhlmann se unieron (Kuhlmann estaba integrada en Ugine) y en 1970 este grupo se unió al grupo Pechiney para formar el holding Pechiney-Ugine-Kuhlmann. Cuando es cuestión de la casa-madre, se trata del holding. Así, en el caso de PUK, la casa-madre es PUK.

Lo que concierne a la Compagnie générale d’électricité es de una extrema complicación. La CGE propiamente dicha; se trata también de una especie de holding que detiene numerosas participaciones en filiales industriales; en 25 filiales, más del 50% de las participaciones, más del 90% en 15 de ellas, y menos del 30% de participaciones en numerosas subfiliales. Así, CGE posee el 65,8% de las participaciones de Alsthom-Atlantique que detenta más del 30% de las acciones de 43 subfiliales, de las cuales en 30 más del 20% y, en las otras 45 subfiliales, menos del 50% de participación. Pero no es todo, el holding CGE detenta el 62,04% de las acciones de un subholding, la Compagnie électro-financière, que ella a su vez detenta participaciones en filiales, las cuales, a su vez, detentan participaciones en múltiples subfiliales.

Sacilor, Usinor, PUK, CGE, Saint-Gobain, Rhône-Poulenc SA, Thomson-Brandt, Matra, estos grupos están constituidos, con variantes, de forma similar. Dassault-Breguet aviation está controlado en un 74,88% por la misma Dassault y en un

30% por el estado. En lo que concierne a los grupos Matra y Dassault-Breguet, el estado tomará el 51% de las participaciones. Eventualmente, en los próximos cinco años, el estado extenderá su toma de participaciones a los cuatro grupos (ITT-France, CII-HB, Roussel-Uclaf) que están bajo el control más o menos importante de grupos extranjeros, formarán parte de otra serie de nacionalizaciones cuyas modalidades no son fijas.

Hay una diferencia muy importante entre las nacionalizaciones industriales de 1945-1947 y las que se están proyectando ahora. En 1945-1947 se trataba en general de nacionalizaciones directas de empresas industriales y de transportes. En 1981 el estado toma el control total o parcial, a menudo una simple participación, en las empresas por medio de nacionalizaciones de grupos que tienen, todos ellos más o menos, el carácter de holding financiero. Si se recuerda que las empresas ya nacionalizadas o públicas constituyen una multitud de filiales con participación del capital privado, se trataría entonces de una interpenetración del capital en manos del estado (estado burgués) y del capital privado, ligados indisolublemente.

A las nacionalizaciones de los once grupos debe unírsele la nacionalización de las sociedades financieras Paribas y Suez y de los bancos privados que tienen casi mil millones en depósitos. 36 bancos y sus filiales serían, así, nacionalizados.

Al menos en cierta medida esas nacionalizaciones coinciden con las de los once grupos pues esos bancos participan de forma más o menos importante en los holding financieros que serán nacionalizados.

Pero es también remarcable que se le deja a los negocios de los bancos un vasto campo para el capital privado. Ciertamente el montante de los depósitos que concentrarán los bancos nacionalizados alcanzará el 95% de todos los depósitos. Según los *Echos*, sin embargo, sobre 376 bancos inscritos, solo 39 serían nacionalizados (36 más los 3 ya nacionalizados), y, si se añaden las filiales que controlan, esto hará que el estado controle 126 bancos). Quedan 270 bancos privados: bancos de toda suerte, entre ellos los bancos extranjeros que operan en Francia. A ello hay que añadir los establecimientos financieros de múltiples tipos, que realizan toda suerte de operaciones de crédito, colocación de acciones y obligaciones. Sin olvidar a los establecimientos financieros bajo el control del estado como el Crédit National, el Crédit Foncier, pero que son establecimientos con estatuto privado (un poco como el Banque de France tras la reforma de 1936). Incluso en lo que concierne a los depósitos, los bancos no nacionalizados pueden jugar un gran papel en el futuro. Es suficiente con recordar que el Crédit Commercial de France, el Crédit Industriel et Commercial, clasificados como bancos de depósitos, no fueron nacionalizados en 1945 por ser considerados pequeños bancos. Hoy en día son bancos que cuentan como grandes bancos de depósitos. Más, las participaciones financieras que poseen el grupo Paribas-Suez y los bancos nacionalizados en los grupos industriales o comerciales no serán nacionalizadas (salvo, naturalmente, aquellas que conciernen a los once grupos que de cualquier forma pasarán al estado). Serán cedidas de nuevo al capital privado.

El gobierno siempre ha declarado que los accionistas de los bancos y grupos nacionalizados recibirán una “justa indemnización”. En origen, era cuestión que las acciones fueran intercambiadas contra obligaciones reembolsables en quince años, cuyo precio sería determinado por la cotización que las acciones tuviesen en bolsa en un período determinado. Rendirán, evidentemente, interés, pero además serán negociables inmediatamente con los bancos, es decir que el capital que representarán se podrá movilizar inmediatamente. El gobierno Mitterrand-Mauroy hará, además de esta operación, nuevas concesiones tomando a su cargo una parte de los activos de los grupos y teniendo en consideración los beneficios de las sociedades nacionalizables durante estos últimos años.

Los capitalistas, la burguesía, acentúan sus ataques

Las concesiones considerables del gobierno Mitterrand-Mauroy no son suficientes para los capitalistas, para la burguesía. Prosiguen su ofensiva, o más aun: la acentúan. El mismo Favila, ya citado, escribe en *Les Echos* (órgano del CNPF) del 10 de septiembre de 1981:

“¿Y si se habla de esta famosa indemnización no en abstracto sino en términos concretos, es decir cifrando el montante de la factura final? Puede que se descubra entonces que el desembolso será como mínimo cuatro o cinco veces más elevado de lo que la inocencia de los expertos socialistas no imagina. Y ello por tres razones” la indemnización debe *“incorporar necesariamente la plusvalía enorme aportada día tras día desde hace treinta años por el dinamismo de los equipos responsables, según las reglas honoradas en los países de economía de mercado.*

Al precio efectivamente pagado por el estado para despojar a los accionistas, hará falta, tarde o temprano, añadir el coste de los procesos que los propietarios actuales no dejarán de abrir ante los tribunales franceses, europeos e internacionales.

Los gobiernos extranjeros no admitirán fácilmente que sus súbditos sean víctimas del cambio de régimen político acaecido en Francia. Los socialistas franceses se han lanzado a un negocio que arruinará al país en sentido propio por culpa de no percibir la extraordinaria imbricación de los intereses económicos en el seno del mundo occidental.

El gobierno Mitterrand-Mauroy es prisionero del marco del que ni puede ni quiere escapar en tanto que gobierno burgués. En primer lugar, es prisionero de la Constitución de la V República, que no quiere cuestionar *“Nadie puede ser privado de la propiedad, derecho inviolable y sagrado, si no es porque lo exige la necesidad pública, legalmente constatada, y evidentemente y bajo condiciones de una justa y previa indemnización,”*

¿Quién va a determinar esto? El parlamento que vota la ley. En este caso, el gobierno Mitterrand-Mauroy no debería tener problemas, al menos en la Asamblea Nacional, pues el grupo socialista dispone por sí solo de la mayoría absoluta. Sí y no. Las leyes pueden ser sometidas al Consejo Constitucional. Ahora bien, éste puede ser apelado por sesenta diputados o sesenta senadores. El Consejo Constitucional, cuya composición es la misma que bajo Giscard, se erige por encima del Parlamento, del gobierno y, en esta ocasión, del presidente de la República.

No es más que uno de los medios de los que disponen los capitalistas, la burguesía. El sabotaje económico y financiero es otro, sin duda mucho más potente aun en la medida en que el gobierno Mitterrand-Mauroy no quiere romper con la burguesía sino que la llama en su auxilio. Otro medio de una considerable potencia es, evidentemente, la presión del capitalismo internacional. Favila la brande como si fuera un tomahawk en una danza del cuero cabelludo. Dice: los capitalistas de todos los países están al lado del capitalismo y la burguesía franceses contra el gobierno Mitterrand-Mauroy, contra las nacionalizaciones. No dudarán en arruinar a Francia si es necesario (se nota como un recuerdo de lo que pasó en Chile entre 1970-1973). El gobierno Mitterrand-Mauroy es prisionero del marco internacional, de las relaciones económicas y políticas burguesas, europeas e internacionales, en las que está inmerso y que quiere defender.

Nuestra posición

La lucha no ha hecho más que comenzar. Es importante que la OCI unificada y sus militantes tengan una comprensión y posición claras sobre estos problemas, que son problemas políticos en el más alto grado, planteando la cuestión del poder, la cuestión del modo de producción. Leon Blum, que informaba sobre el programa de acción de la SFIO elaborado en el congreso de Toulouse en 1934 -programa que reclamaba la socialización del crédito, de los seguros, de las grandes industrias monopolistas, ferrocarriles, minas, electricidad), la creación de oficios públicos agrícolas y de cooperativas de reparto, de grandes trabajos públicos financiados por el ahorro regional, la elaboración de códigos de trabajo que asegurasen una reducción del trabajo y un salario adecuado- afirmaba:

“Ninguna de la medidas iniciales que acaba de nombrar el congreso no tiene la menor posibilidad de ser realizada mientras no tenga el poder el socialismo. Una vez instalado en el poder, el Partido Socialista, dominado por el sentimiento de su misión revolucionaria, no debería dejarse encadenar o limitar por ningún plan ni programa.”

En efecto, la socialización, la expropiación del capital de sus posiciones económicas esenciales, la orientación de la economía en función de las necesidades de las masas, sólo pueden realizarse por un partido que, una vez en el poder, dominado por el sentimiento de su misión revolucionaria, no se deje frenar por ningún plan ni programa limitados. Ese partido no fue la SFIO a la que Leon Blum apremiaba a distinguir entre el ejercicio del poder y la toma del poder. El primero se sitúa en el marco del régimen capitalista y debe limitarse a la “gestión honesta y leal del régimen capitalista”, dando su marco a las posibles nacionalizaciones. La segunda no es más que una hipótesis que para él pertenecía al romanticismo revolucionario.

La orientación de la OCI unificada debe estar de acuerdo con el método y contenido del *Programa de Transición*.

La OCI unificada está a favor de las nacionalizaciones porque suponen un cuestionamiento de la propiedad privada de los medios de producción, incluso si se sitúan en el marco de la propiedad privada de los medios de producción. Traducen el carácter social de la producción en oposición a la propiedad privada de los medios de producción. Por lo mismo, la OCI unificada plantea el interrogante ¿por qué las nacionalizaciones son necesarias? Y responde: “porque el régimen capitalista ha quebrado; porque lleva al lazo de precios, a la bajada del poder adquisitivo, al paro, a la miseria, a la liquidación de todas las conquistas de la clase obrera y de las masas explotadas; porque prepara una catástrofe económica y social sin precedentes.”

¿Por qué son necesarias estas nacionalizaciones? Porque para luchar contra el alza de precios y acabar con el paro es indispensable que se elabore un plan de producción, que rompa con la ley del beneficio y responda a las necesidades sociales de las masas. Esto solo es posible tomando las medidas anticapitalistas más rigurosas. Esto es lo que han querido las masas trabajadoras echando a Giscard del poder, aplastando la coalición RPR-UDF, eligiendo a Mitterrand y a una aplastante mayoría PS-PCF en la Asamblea Nacional. ¿Qué significaría haber proyectado la nacionalización de once de los grupos capitalistas, la nacionalización de los bancos de depósitos más importantes, si no fuera para eso?

La OCI unificada debe retomar palabra por palabra lo que Trotsky escribía en 1934 en el discurso que redactó y que Bardin pronunció en el Comité Confederal Nacional de la CGT, congreso en el que estaba en el orden del día la cuestión del plan: *“La banca capitalista está al servicio de la economía capitalista. Habrá que decir, pues: queremos arrancar la banca de las manos de los explotadores capitalistas para*

hacer de ella una palanca de la transformación social, es decir de la edificación socialista.”

Pero la nacionalización de los bancos no debe ser parcial. La experiencia de 1945 está ahí, convincente (el crédito no se divide). Hay que nacionalizar el conjunto de los medios de crédito, de los servicios financieros: los bancos, todos los bancos, los establecimientos financieros de cualquier naturaleza, esos inmensos recursos de dinero que son los seguros. El monopolio del crédito es indispensable.

“Después de la nacionalización de los bancos hay que lograr su completa unificación. Todos los bancos particulares deben ser transformados en filiales del banco nacional. Sólo esta unificación puede transformar el sistema de bancos nacionalizados en un sistema de contabilidad y dirección de la economía nacional.”

La nacionalización de los once grupos ha sido considerada como indispensable por el mismo gobierno Mitterrand-Mauroy. No hay ninguna razón para retroceder ante las amenazas de los capitalistas. La nacionalización debe ser real y total. Pero, por otra parte, la patronal continúa despidiendo, practicando las quiebras. Es una medida indispensable de defensa de la clase obrera, de la juventud, expropiar las empresas en las que los patronos despiden, plantean quiebras, garantizar el empleo, nacionalizarlas igual que, también, a los grupos de los que forman parte estas empresas.

La cuestión de las indemnizaciones y rescates debe ser abordada en función de la respuesta a la pregunta: ¿Por qué son necesarias las nacionalizaciones? Porque el capitalismo está en quiebra, porque es el despilfarro, porque se trata de la crisis, porque hay que hacer un plan de producción que responda a las necesidades de las masas y rompa con la ley del beneficio. Entonces, ¿por qué “indemnizar a los capitalistas? En la misma medida en que ese dinero es indispensable para financiar un plan de producción que acabe con la crisis y responda a las necesidades de las masas. Por otra parte ¿qué es el capital?

“Es el trabajo de los obreros acumulado por los capitalistas. El capitalismo ha quebrado. Arruina a la nación. Las deudas de los capitalistas hacia el pueblo sobrepasan en mucho al valor real de sus empresas. No. ¡Ningún rescate! Ningún nuevo esclavismo, la expropiación pura y simple, la confiscación.”

En conciliación con los capitalistas, con los burgueses, no pueden realizarse verdaderas nacionalizaciones; es precisa una batalla sin piedad contra ellos. La movilización revolucionaria de las masas es indispensable. El ejemplo de las nacionalizaciones de 1936-1937, de 1945-1947 es elocuente. El aparato del estado de la burguesía ha puesto a disposición de los capitalistas las nacionalizaciones realizadas. Hoy en día las cosas están peor aun si es posible: el aparato dirigente de las empresas ya nacionalizadas está compuesto por agentes directos del capital privado. Hay que llamar a los trabajadores contra los aparatos dirigentes de los bancos nacionalizados o por nacionalizar, establecimientos financieros, compañías de seguros, como empresas industriales ya nacionalizadas o por nacionalizar. Por ello, la OCI unificada preconiza la celebración de un congreso de empleados del crédito que discuta sobre la nacionalización del crédito y de las cuestiones que plantea: monopolio del crédito, banca única, publicación de todos los movimientos bancarios, contra la especulación, contra la huída de capitales, los “buenos” negocios, control de los trabajadores de los bancos, establecimientos financieros, compañías de seguros y, claro, satisfacción de sus reivindicaciones.

Esto no tiene nada que ver con la susodicha gestión tripartita. No hay gestión común entre los trabajadores y los capitalistas que utilizan el crédito. La gestión de las

empresas nacionalizadas remite al poder político. Por el contrario, el control de esta gestión pertenece a los trabajadores.

Al final de cuentas, la nacionalización del crédito, la nacionalización de amplios sectores industriales, la elaboración de un plan de producción, toman su significado a partir de la respuesta a esta pregunta: ¿quién tiene el poder político, en nombre de quién, aplicando qué política? Es imposible gobernar conciliando lo inconciliable, explotados y explotadores, proletarios y capitalistas.

Es necesario romper con los capitalistas, con la burguesía. Hay que llamar contra un aparato de estado, contra un aparato de dirección de las empresas ya nacionalizadas, modelado por 23 años de V República, contra el aparato de dirección de las empresas por nacionalizar, como, también, contra la dirección de las otras empresas, a la clase obrera y a las masas explotadas para elaborar, realizar, un plan de producción que acabe con el alza de precios, el paro y la crisis y responda a sus necesidades.

Esta línea debe ser la de la OCI unificada. Es necesario, naturalmente, que esta política sea alimentada por la vida cotidiana económica, social y política.

Stéphane JUST, 16 de septiembre de 1981



Para contactar con nosotros: germinal_1917@yahoo.es

Visita nuestra página web: www.grupgerminal.org